

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-22416-2015
CARATULADO : SERVICIO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR / SERVICIOS PULLMAN BUS COSTA
CENTRAL S.A.

Santiago, treinta de Octubre de dos mil veinte

VISTOS:

A fojas 2, comparece Ernesto Muñoz Lamartine, abogado, Director Nacional del **Servicio Nacional del Consumidor**, con domicilio en calle Teatinos N° 50, Piso 7, comuna de Santiago, quien deduce demanda para la defensa de los interés colectivos y difuso de los consumidores, mediante procedimiento especial establecido en el Título IV de la Ley 19.496 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores -en adelante LPC- en contra de **Servicios Pullman Bus Costa Central S.A**, del giro de su denominación, representada legalmente por José Marcos Antonio Martínez Morasco, ambos domiciliados para estos efectos en Nicasio Retamales N° 71, comuna de Estación Central, y contra **Alejandro Antonio Cabello Reyes** (Ruta Vía Curacaví o RVC), empresario, domiciliado en calle Hogar de Cristo N° 3659, comuna de Estación Central, o bien representadas cada una de ellas en conformidad al inciso tercero del artículo 50-C en relación con el 50-D, ambos de la LCP.

A fojas 45, se declaró admisible la demanda colectiva.

A fojas 46, con fecha 29 de octubre de 2015, se notificó personalmente al demandado Alejandro Antonio Cabello Reyes.

A fojas 60, con fecha 18 de noviembre de 2015, se practicó la notificación personal subsidiaria al representante legal de la demandada Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

A fojas 50 y 103, respectivamente, las demandadas dedujeron reposición, en virtud de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 19.946, recurso que fue desestimado por resolución de 14 de enero de 2016.

A fojas 172 y 225, las demandadas presentaron sus respectivos escritos de contestación.



A fojas 253, consta la publicación del artículo 53 de la Ley 19.496, practicada en Diario La Tercera con fecha 21 de enero de 2016, mientras que, a fojas 254, aquella publicación en el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor.

A fojas 280, se llamó a las partes a conciliación, audiencia que fue suspendida, y luego reanudada a fojas 284, sin que las partes llegaran a acuerdo.

A fojas 309, se recibe la causa a prueba, fijándose los hechos a probar, resolución que fue modificada con fecha 8 de febrero de 2017, a fojas 338.

A fojas 1003, encontrándose la causa en estado, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS TACHAS.

PRIMERO: Que las causales de inhabilidad tienen por objeto excluir un testimonio de la valoración del juez, en razón de verse afectada la veracidad o imparcialidad de una declaración por alguna de las causales establecidas en los artículos 357 y 358 del Código de Procedimiento Civil;

SEGUNDO: Que la demandante formula tacha en audiencia testimonial de 06 de abril de 2016, incorporada a fojas 444 y siguientes de la carpeta electrónica, respecto del testigo Juan Esteban Doña Novoa, por la causal contemplada en el artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que carece de imparcialidad al tener interés económico y directo en el pleito, por elaborar un informe privado que ha servido como instrumento probatorio en la causa, y al cual la parte que lo presenta le adeuda el pago de honorarios, razón por la cual su testimonio se encuentra evidentemente comprometido;

TERCERO: Que, al evacuar traslado, la demandada solicita el rechazo de la inhabilidad invocada, en atención a que de los dichos del testigo no se desprende un interés directo ni indirecto en los resultados del juicio, considerando además que los honorarios pendientes del mismo



incluyen su declaración testifical, la cual tiene por objeto ilustrar los elementos técnicos tenidos a la vista en la confección de su informe;

CUARTO: Que, al respecto, es menester señalar que, de las respuestas del deponente a las preguntas de tacha formuladas por la contraria, no se desprende, a juicio de este Tribunal -como la norma legal lo indica-, ningún antecedente que permita siquiera suponer que tiene interés en el mismo, ya sea directo o indirecto, el que además, de acuerdo a la reiterada jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia debe ser de carácter económico. En efecto, no es posible afirmar que los honorarios profesionales -los cuales comprenden su declaración en estrados al tenor de su informe- tengan vinculación con el resultado del pleito, sea directo o indirecto, pues, no surge ningún elemento que permita advertir la existencia de un interés que afecte su imparcialidad, ni menos aún la existencia de antecedentes que permitan al Tribunal concluir en tal sentido, ello, sin perjuicio del valor probatorio que en definitiva se asigne a tal declaración.

Por estas consideraciones, **se rechaza, sin costas**, la tacha deducida por la parte demandante en contra del testigo Juan Esteban Doña Novoa, presentado por la parte demandada Alejandro Cabello Reyes;

II.- EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DILATORIAS.

QUINTO: Que, dentro de su escrito de contestación, de fecha 22 de enero de 2016, que rola a fojas 172, la demandada Servicios Pullman Bus Costa Central S.A opone excepciones dilatorias de incompetencia, inadecuación del procedimiento e ineptitud del libelo.

La **incompetencia absoluta** del artículo 303 N°1 del Código de Procedimiento Civil, la fundamenta en aquellos casos en que la ley no entrega de forma expresa al conocimiento del Juez que conoce del asunto la materia sometida a su decisión, de manera que ese Tribunal será incompetente en términos absolutos, cuestión que precisamente sucedería en la especie, toda vez que el Sernac habría deducido la presente demanda ejerciendo la acción del artículo 30 del D.L. 211, que comprendería única y exclusivamente una indemnización de perjuicios derivada de una infracción



a la Ley de Defensa de la Libre Competencia y, referida únicamente a intereses individuales y no a intereses colectivos ni difusos. Agrega que la acción vulnera el principio de juridicidad, el cual acarrea la incompetencia absoluta, y que las actuaciones de los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la Republica, manifestando que el Sernac ha interpuesto la acción del artículo 30 del DL 211, dirigiéndola a través de un procedimiento regulado en la LPC, invocando una lesión de intereses colectivos y/o difusos, careciendo de competencia para conocer de esta acción, ya que no se trata de una situación que la ley ha colocado dentro de sus atribuciones.

Planea que, en razón de la materia, la acción del artículo 30 del D.L. 211 no puede entenderse de interés colectivo o de interés difuso, en los términos del artículo 50 de la LPC, cuando su objeto es indemnizar perjuicios que tienen por fuente jurídica de esa obligación una infracción a la Ley de Defensa de la Libre Competencia, además de que su causa de pedir es un hecho constitutivo, tipificado y sancionado específicamente en el artículo 3 del D.L. 211 sobre defensa de la Libre Competencia. En este sentido, tanto el objeto como causa de pedir de la acción no estarían basados en un interés colectivo o difuso de los que regula la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, sino en el bien jurídico libre competencia, que protege al mercado o a los agentes económicos en el mercado, entendiendo incluso por razones conceptuales que la norma citada abre la posibilidad a que los consumidores reclamen la infracción ante los Juzgados de Policía Local;

En segundo lugar, alega la excepción de **inadecuación del procedimiento**, argumentando que la acción ejercida por el Sernac corresponde a la de indemnización de perjuicios del artículo 30 del DL 211, pretendiendo someterla al procedimiento colectivo regulado en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, en circunstancias de serle aplicable la tramitación de un procedimiento sumario, regulado en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo que materializaría la inadecuación del procedimiento intentado en autos por la



actora. Así, detalla la siguiente estructura de argumentos que refuerzan la excepción deducida: i) La acción intentada por el Sernac tiene previsto un procedimiento en la ley, un juicio sumario, y esta fue entablada dentro de un procedimiento distinto; ii) La acción tiene por objeto resarcir los perjuicios a agentes económicos afectados por un ilícito anticompetitivo, mientras que la de Sernac busca resarcir perjuicios a los consumidores; iii) La acción debe ser de carácter individual, y el servicio le atribuye carácter supraindividual; iv) Existen varios proyectos de ley que pretenden abrir el espacio para que un injusto monopolio que haya causado daño a los consumidores pueda entablarse a partir del fallo firme del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en esta clase de procedimiento colectivo, lo que hoy no se puede hacer.

En tercer lugar, opone la excepción de **ineptitud del libelo**, prevista en el artículo 303 N° 4 del Código de Procedimiento Civil en relación con los artículos 254 del Código de Procedimiento Civil y artículo 52 de la LPC, por cuanto la demanda incurrió en la omisión de un demandado (Atevil), como también en errores al fundamentar su legitimación activa, además del hecho de que la sentencia invocada no estableció un acuerdo de precios, ni el libelo pretensor infracciones que tornen procedente la obligación de indemnizar perjuicios, lo que se traduce en un incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 ya citado, y harían inepta a la demanda por carecer de causa de pedir que la habilite;

SEXTO: Que en cuanto a la primera excepción dilatoria, es menester señalar que la acción incoada por la actora, en defensa del interés difuso y colectivo de los consumidores, debe ser sustanciada conforme a un procedimiento de protección a los intereses supraindividuales de los consumidores, contenido en los artículos 50 y siguientes de la ley 19.496 que encomienda este tipo de juicios a los tribunales ordinarios de justicia, a diferencia de aquellos que persiguen el interés individual del sujeto y que pueden sustanciarse ante los Juzgados de Policía Local. Por tanto, debe entenderse entonces, que la justicia ordinaria civil es competente para conocer de la presente acción, de conformidad a las reglas generales,



confirme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 50-A de la LPC, por lo que será desestimada la excepción de incompetencia absoluta;

SÉPTIMO: Que, en relación a la inadecuación del procedimiento, y revisados los antecedentes de la causa, pese a indicar el sistema y nomenclatura un procedimiento “Ordinario”, el tribunal advierte que esta fue tramitada correctamente acorde a las reglas establecidas en los artículos 51 y siguientes de la LPC, teniendo además presente que el expediente es de carácter material, con ingreso anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica, de manera que la sola referencia a un procedimiento distinto de aquél establecido en la norma no resulta suficiente para acceder a la excepción en comento, por lo que, necesariamente, habrá de ser desestimada;

OCTAVO: Que, en cuanto a la última dilatoria, no ha de olvidarse que la excepción de ineptitud del libelo apunta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, cuya finalidad es garantizar el inicio del procedimiento en forma clara y precisa, asegurando la debida defensa del demandado. En este sentido, la jurisprudencia ha resuelto que un libelo es inepto cuando aquel se torna vago, confuso e ininteligible en términos tales que hagan imposible plantear una defensa.

En este sentido, de la lectura de la demanda, se advierte que en ella se han expuesto en forma clara los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, resultando del todo comprensibles. A mayor abundamiento, pronunciarse sobre la procedencia de los argumentos esgrimidos por el demandante para sustentar su legitimación, como también en que la omisión de un interviniente suponga dificultad en el cálculo de posibles indemnizaciones, y en definitiva, determinar o no la obligación de indemnizar, corresponde a cuestiones que forzosamente han de ser reservadas para la discusión de fondo. En consecuencia, no adoleciendo la demanda de defectos formales que la hagan ininteligible, será rechazada la excepción de ineptitud de libelo;



III.- EN CUANTO AL FONDO.

NOVENO: Que a fojas 2, comparece Ernesto Muñoz Lamartine, abogado, Director Nacional del **Servicio Nacional del Consumidor**, quien deduce demanda para la defensa de los interés colectivos y difuso de los consumidores, mediante procedimiento especial establecido en el Título IV de la Ley 19.496 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores -en adelante LPC- en contra de **Servicios Pullman Bus Costa Central S.A**, representada legalmente por José Marcos Antonio Martínez Morasco, y contra **Alejandro Antonio Cabello Reyes** (Ruta Vía Curacaví o RVC), todos ya individualizados.

Expone que el Sernac se ha visto en la obligación de deducir demanda colectiva indemnizatoria, en beneficio de los consumidores afectados, por cuanto las empresas demandas, se coludieron para fijar tarifas y coordinar las frecuencias en la ruta Santiago- Curacaví-Santiago, solicitando que los consumidores sean debidamente resarcidos por los perjuicios que dichos actos les provocaron, conforme a lo establecido en el artículo 3° inciso primero, letra e) de la LPC.

Señala que esta acción se ejerce en cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 del Decreto Ley 211, el cual dispone que los daños y perjuicios que hayan sido sufridos como consecuencia de una conducta anticompetitiva -como la colusión- pueden ser demandados una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, en este caso, a partir del 30 de abril de 2015, fecha en que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) dictó el cúmplase referido a la sentencia de la Excma. Corte Suprema, que confirmó la sentencia condenatoria dictada previamente por el tribunal. Así, desarrolla su demanda en 4 capítulos: i) Cuestiones previas; ii) Hechos y circunstancias establecidos mediante sentencia ejecutoriada; iii) Elementos de la responsabilidad civil que deben analizarse en esta sede; y iv) Consideraciones finales relativas al examen de admisibilidad de la demanda.

I.- Cuestiones previas:



a.- Antecedentes Generales: Sostiene que el 20 de abril de 2015, la Excma. Corte Suprema confirmó la sentencia condenatoria dictada por el TDLC con fecha 15 de enero de 2014, a través de la cual se acogió el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica en junio de 2011, en contra de Pullman, Ruta Curacaví y la empresa Atevil Mecánica Diésel S.A, condenando a las empresas requeridas por la infracción del artículo 3 letra a) del DL 211, por coludirse para repartir las frecuencias y alzas de tarifas en el servicio de transporte público de pasajeros, en la ruta Santiago-Curacaví-Santiago, fijándole una multa de 1500 UTA a Pullman, y de 50 UTA a Ruta Curacaví, mientras que Atevil fue beneficiado con exención de multa, acorde al artículo 39 bis del mismo decreto, destacando la gravedad de los hechos condenados en la referida sentencia.

b.- Responsabilidad civil por infracciones a la libre competencia del Derecho Chileno: Cita el artículo 1° del DL 211, para señalar que su objeto es promover y defender la libre competencia en los mercados, agregando que la acción de indemnización por los daños producidos con motivo de infracciones a la libre competencia, se encuentra regulada en el artículo 30 de DL 211, que según lo mencionado, nace una vez que exista sentencia definitiva y ejecutoriada del TDLC, debiendo reclamarse los perjuicios ante el juez civil, y de acuerdo a la norma citada, se puede demandar la reparación de los perjuicios solo una vez declarada la antijuridicidad de la conducta. Arguye que el efecto de la referida norma, es precisamente, que las conductas, los hechos y la calificación jurídica no puedan discutirse en sede civil, pues tales cuestiones fueron establecidas por sentencia ejecutoriada de un tribunal especializado, y estando estas acreditadas, lo que cabe discutir para que sea procedente la indemnización, son los restantes elementos de la responsabilidad civil extracontractual, esto es, la existencia del daño y la relación de causalidad entre este y la conducta atentatoria contra la libre competencia.

c.- Procedimiento aplicable en los casos en que el atentado contra la libre competencia causa daños en un número amplio de consumidores: Indica que el procedimiento para la defensa del interés colectivo difuso de los consumidores se encuentra en los artículos 51 y



siguientes de LPC, y que este es aplicable cada vez que se vean afectados los intereses de tal clase. Hace presente que, dicho procedimiento especial, contemplado en el Título IV de la LPC, tiene aplicación incluso en materias reguladas por leyes especiales, consagrando el legislador en la Ley 20.555 la obligación de los organismos fiscalizadores con facultades sancionatorias respecto de sectores regulados por leyes especiales, según el artículo 2° bis de dicha ley de remitir al Servicio Nacional de Consumidor copia de las resoluciones que impongan sanciones, señalando además que dicha disposición rige en procedimientos en que se encuentre comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios, y con ello, el derecho a solicitar indemnización por la misma vía.

Lo anterior, evidencia que el ámbito de aplicación de la LPC en este caso se rige por un principio de concurrencia entre sus normas y la normativa especial (principio de concurrencia plena), por lo que, a juicio de la actora, la solución procesal contemplada en nuestro derecho, es precisamente, la presentación de una acción colectiva para solicitar la indemnización de perjuicios;

II.- Conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos establecidos por sentencia ejecutoriada.

Señala que, como se dijo anteriormente, la sentencia condenatoria del TDLC, confirmada por la Excma. Corte Suprema, acogió el requerimiento de la FNE, dando por acreditada el alza concertada de precios y la determinación de frecuencias entre las empresas demandadas y condenando a las demandadas al pago de las correspondientes multas por atentar contra la libre competencia, al coludirse para subir los precios y determinar las frecuencias, de los servicios de transporte de pasajeros en la ruta citada, lo que causó un evidente perjuicio a los consumidores, no solo considerando a aquellos que debieron pagar un sobreprecio por el servicio, sino también a quienes dejaron de gozar del mismo por no poder contratar al precio que artificialmente fue fijado por las empresas coludidas;

III.- Elementos de la responsabilidad civil que deben analizarse en esta sede.



Plantea que, como se indicó desde el inicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del DL 211, el proceso indemnizatorio se limita a la determinación de la existencia del daño y la relación de causalidad entre aquél y la acción ilícita, mientras que los demás elementos de la responsabilidad civil extracontractual, a saber, la culpa y un hecho imputable, se dan por establecidos en la sentencia condenatoria dictada en sede de competencia, en la cual se determinan los hechos y la participación de las codemandadas, así como la calificación de la ilicitud de sus conductas. En efecto, las sentencias de la Excma. Corte Suprema y del TDLC establecieron que era incontrovertible que los consumidores sufrieron perjuicios, estimando hacer análisis en los siguientes tópicos: 1) Existencia de perjuicios; 2) Evaluación de perjuicios; 3) Causalidad entre el daño producido y la infracción a la libre competencia por parte de las demandadas.

1.- Existencia de perjuicios: Refiere que esta fue reconocida expresamente por la Corte Suprema a lo largo de toda su sentencia, comentando que estos provienen de dos fuentes: a) consumidores que utilizaron el servicio de transporte a un precio colusorio y; b) consumidores que se vieron impedidos de acceder a dicho transporte público a causa del alza de precios.

a.- Daño por contratar servicio de transporte público a precios colusorios: Explica que el pago a un precio superior al real de un mercado sin la conducta infractora produce un perjuicio directo en los consumidores que utilizaron los servicios en la época de colusión, por el sobreprecio que pagaron por cada tarifa. Por otra parte, el monto de dichos perjuicios sufridos se expresa en la diferencia de precio de mercado no colusivo y el precio efectivamente cobrado, en relación al volumen de las transacciones de las empresas coludidas durante el acuerdo anticompetitivo. El efecto de la conducta ilícita fue la disminución del patrimonio de los consumidores afectados debido al gasto adicional en que incurrieron por la contratación de un servicio de transporte a un precio artificialmente mayor, esto es, daño emergente, siendo estos perjuicios actuales y ciertos, tanto por las características propias de la conducta ilícita, como la circunstancia que su existencia fue establecida por la sentencia de la Excma. Suprema.



b.- Daño producido a los consumidores que dejaron de utilizar el servicio de transporte público como consecuencia del alza en las tarifas: Afirma que no solo se vieron afectados los consumidores por la imposibilidad de acceder a los servicios en cuestión -a causa del alza artificial de sus precios- sino también aquellas personas que, sin tener una relación contractual, intervinieron en esa relación de consumo;

2.- Avaluación de los perjuicios: Describe que, para determinar el daño producido por un cartel, es decir, el derivado del sobreprecio cobrado, el cálculo de los perjuicios totales equivale a la multiplicación del número de pasajeros transportados por la diferencia entre el precio de colusión y el precio que habría existido sin este actuar ilícito, mientras que, para la determinación del precio de mercado de los productos objeto del acuerdo del cartel, la jurisprudencia ha utilizado diversos mecanismos que dependen de la abundancia de datos, considerando: i) el análisis del mismo mercado, pero en una época anterior, posterior o combinación de ambas; ii) comparación con mercados geográficamente distintos que ofrezcan el mismo servicio, en condiciones del libre competencia donde no sea posible manipular el precio; iii) comparación con otros métodos competitivos que ofrezcan servicios equivalentes; iv) la estimación de un escenario competitivo a partir de variables económicas que determinan los precios;

3.- Causalidad entre el daño producido a los consumidores y la infracción a la libre competencia por la parte de la demandada: Manifiesta que la relación de causalidad entre los perjuicios que se han producido a los consumidores y el hecho imputable de las demandadas, consiste en la infracción de la normativa especial en materia de competencia, mostrándose el vínculo de necesidad entre la colusión y el daño causado, tanto para aquellos perjuicios ocasionados a los consumidores que pagaron el sobreprecio artificial del valor de la tarifa de transporte, como aquellos que no pudieron acceder al servicio a tal precio. Añade que los daños producidos a ambos grupos de consumidores tienen su fuente en la colusión, debiendo ser considerados como daños directos.

Fundamenta que, según lo establece el artículo 51 N° 2 de la LPC, en relación a los perjuicios que se solicita indemnizar, basta señalar el daño



sufrido por los consumidores y solicitar la indemnización que el juez determine conforme al mérito del proceso, la cual debe ser la misma para todos los consumidores que se encuentren en igual situación, debiendo esta magistratura establecer en la sentencia definitiva los grupos y subgrupos de consumidores que se encuentren afectados por las conductas demandadas, calculando, determinando y decretando las indemnizaciones o reparaciones que procedan en razón de los perjuicios ocasionados;

IV.- Consideraciones relativas al examen de admisibilidad de la demanda. El artículo 52 de la LPC establece los requisitos que se han de tener en cuenta para pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción intentada, lo que implica que el examen de admisibilidad fue establecido con el fin de controlar la concurrencia de los elementos formales que justifican ejercer la acción a través del procedimiento de interés colectivo, quedando excluidos los aspectos de fondo, que deben resolverse en la sentencia definitiva. En este marco, examina someramente la concurrencia de los siguientes requisitos:

a.- Legitimación Activa del Servicio Nacional del Consumidor:

Indica que el artículo 51 de la LPC, señala que los procedimientos para la defensa de los intereses colectivos o difusos pueden ser iniciados por SERNAC, quien tiene el poder-deber de iniciar las acciones destinadas a la protección de los derechos de los consumidores, tanto las que tienen su fuente en la propia LPC, como las establecidas en leyes especiales, teniendo en este caso la obligación legal de interponer la presente demanda colectiva. Asimismo, la norma citada, en sus numerales N° 1 y 4, dispone que el servicio tiene legitimidad para actuar en representación del interés colectivo de los consumidores y por expresa disposición de la ley, no requiere acreditar la representación de consumidores determinados del colectivo en cuyo interés se actúa.

b.- Exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que justifican razonablemente la afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores, en los términos del artículo 50, los que se dan por enteramente reproducidos, y como parte integrante de este punto,



concurriendo así tal requisito, según la definición contenida en el artículo 50 incisos quinto y sexto de la LPC.

Con todo lo anterior, pide tener por interpuesta la demanda deducida en contra de Servicios Pullman Bus Costa Central S.A y de Alejandro Cabello Reyes, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación, y con ello, declarar admisible la demanda por cumplir ésta con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley 19.496, y en definitiva, determinar los grupos y subgrupos de consumidores que fueron afectados por las demandadas, y declarar la procedencia y monto de las correspondientes indemnizaciones o reparaciones a favor del grupo o de cada uno de los subgrupos que correspondan, conforme a los artículos 51 N° 2, 53-A y 53-C letra c) del mismo cuerpo legal, con expresa condenación en costas;

DÉCIMO: Que a fojas 172, con fecha 22 de enero de 2016, comparece Domingo Cereceda Miranda, abogado, en representación de Pullman Bus Costa Central S.A, quien viene en contestar la demanda, solicitando el rechazo de la misma, con costas.

Tras una muy breve síntesis de la demanda deducida en autos por Sernac, presentan al Tribunal la estructura sobre la cual se va a organizar la exposición de su defensa, dividida en dos grupos, el primero relativo a las excepciones dilatorias de incompetencia absoluta en razón de la materia, de inadecuación del procedimiento e ineptitud del libelo; el segundo contiene excepciones perentorias y alegaciones o defensas, según el siguiente detalle:

1.- Excepción de falta de legitimación activa del Sernac; 2.- Excepción de falta de legitimación pasiva de la parte que representa; 3.- Alegación de inexistencia de daño indemnizable por falta de requisitos legales y falta de causalidad del mismo; 4.- Excepción de inexistencia de la prejudicialidad alegada por el Sernac; 5.- Improcedencia de la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual deducida; 6.- Excepción fundada en la omisión de una acumulación inicial de acciones exigida por la ley; 7.- Improcedencia de las indemnizaciones de perjuicios demandadas por supuesta infracción a intereses difusos de los consumidores; 8.- Inexistencia del daño demandado; 9.- Inexistencia de daño indemnizable por falta



de requisitos legales y de falta de causalidad del mismo; 10.- Indeterminación de la contribución al daño demandado; 11.- Excepción de prescripción.

Que, habiéndose transcrito el primer grupo de argumentos de la defensa, relativo a las excepciones dilatorias desarrolladas entre el considerando quinto y octavo, continúa su presentación oponiendo las excepciones perentorias y alegaciones anunciadas en el párrafo anterior, no sin antes negar la efectividad de todos los hechos expuestos en la demanda y escritos posteriores de SERNAC, salvo la de aquellos que se tengan por expresamente reconocidos.

1.- Excepción de falta de legitimación activa: Funda su argumentación en el hecho de que la acción intentada en autos por el actor comprendería derechos subjetivos individuales y no derechos supraindividuales, como son los que representan los intereses colectivos y difusos que legítimamente pueda representar el organismo público, los cuales al no existir, lo que hace imposible conceder la pretensión demandada.

Afirma que el Sernac ha acudido erróneamente al procedimiento colectivo para demandar una indemnización de perjuicios en favor de los consumidores, a quienes agrupa como agraviados en sus intereses colectivos y difusos, por cuanto el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no aprovecha a los consumidores.

Explica que se distinguen tres clases de intereses que admiten tutela colectiva: los difusos, los colectivos y los individuales homogéneos, los cuales tienen en la legislación chilena un modelo restringido de protección, plasmado en el artículo 50 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, al disponer que el ejercicio de las acciones puede realizarse a título individual o en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores. Las primeras son aquellas promovidas exclusivamente en defensa de los derechos del consumidor afectado; las segundas son las que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor con un vínculo



contractual; y las terceras aquellas que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos.

Al revisar la historia fidedigna de la ley, y alcances del artículo 30 del DL 211, concluye que en la mente del legislador jamás estuvo presente dotar al consumidor de acción resarcitoria fundada en una infracción a la libre competencia, pues el interés del consumidor -o el bien jurídico consumo- está tutelado por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y no por el referido decreto, cuyo bien jurídico protegido es la libre competencia, por lo que se trata de intereses completamente distintos e independientes, sin que uno sea consecuencia del otro, y que requerirían de fundamentaciones y probanzas distintas.

Por lo anterior, entienden que el Sernac no está representando intereses colectivos ni difusos, pues de existir derechos comprometidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, estos son subjetivos individuales, referidos al mercado o a competidores en el mismo mercado relevante en que haya tenido lugar la conducta sancionada, los que de conformidad al propio artículo 30 del DL 211, se deben demandar en juicio sumario por quienes pudieren sentirse afectados. De este modo, al hablar la norma analizada de “perjudicados”, significaría que el daño y el hecho del cual este emana, ya estaría radicado en una titularidad individual, razón por la que se exige que la sentencia se base en las conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos, establecidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Lo argumentado se refrendaría con lectura del artículo 1 del DL 211, que define el ámbito objetivo de aplicación de este cuerpo legal como la promoción y defensa de la libre competencia en los mercados, sin referencia alguna a la protección de los derechos de los consumidores, sea individual o colectivamente, cuestión que consideran lógica, al ser esa regulación materia específica de la ley del ramo.

Reitera que el artículo 30 del DL 211 indicaría derechamente que la acción resarcitoria que contempla se somete a las reglas generales, alojadas en el Código de Procedimiento Civil y no en la LPC, por lo que el procedimiento colectivo sería de aplicación restrictiva, además de olvidar la demandante que esta acción es propia de responsabilidad extracontractual, lo que dejaría



fuera de la misma toda relación de consumo, dado que la LPC se sustenta sobre la base de una responsabilidad contractual, al exigir a relaciones de consumo de carácter contractual o, al menos, una relación jurídica de consumo.

Fundan asimismo la excepción opuesta en los artículos 18 y 31 del DL 211, que reflejan que en los casos en que dicha norma quiso ampliar la legitimación activa, lo hizo a texto expreso y en situaciones muy acotadas, que no requerían recurrir a engorrosas interpretaciones y ligazones de normas inconciliables, como ha tenido que hacer el Sernac para justificar su legitimación activa en autos.

Refuerza la importancia de asentar que, de acuerdo con el principio de legalidad o juridicidad, establecido en los artículos 1, 5, 6 y 7 de la Constitución Política de la República y en el artículo 2 de la Ley 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, cualquier órgano público debe ajustar su proceder estrictamente a las normas jurídicas que lo regulen. Relaciona lo anterior con lo dispuesto en el artículo 58 de la LPC, que establece las funciones del Sernac, las que deben apegarse estrictamente a su actuar, de modo que, la representación del servicio en este caso sería contraria al principio de legalidad, al extender sus actuaciones -incluidas las judiciales- a ámbitos distintos de los que expresamente le reconoce su ley base. Por ello, sólo podría interponer acciones por intereses colectivos y difusos referidos a la LPC y/o leyes especiales de consumo, pero no a aquella del DL 211, ni menos basada en un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo que le impediría tener la legitimación activa exigida por la letra a) del artículo 52 del citado cuerpo legal. A la misma conclusión se arriba del examen del artículo 2 bis de la LPC, también invocado por el Sernac para justificar su legitimación, de cuya lectura considera indesmentible que la entidad no puede prevalecerse de un fallo para conferirse legitimación activa en representación de los intereses colectivos o difusos, porque el decreto no da cuenta de derechos de los consumidores.

En relación a la naturaleza del DL 211, considera que se trataría de una ley general, pues regula en forma general y abstracta el mercado, entendiendo por tal todos los mercados o bien, el mercado considerado globalmente, sin



regular uno en específico, lo que impide que la norma pueda ser considerada como una de las leyes especiales que regulan las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios a las que alude el artículo 2 bis de la LPC, y que habilitaría al servicio a ejercer la acción colectiva, y por tanto, este carecería del derecho que invoca para demandar.

Concluye que todas las disposiciones citadas en su defensa no confieren al Servicio Nacional del Consumidor autoridad, facultad ni derecho para interponer una acción de esta clase basada en un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ello porque el servicio estaría acotado en su actuar a las atribuciones que la propia LPC le concede o aquellas que otras leyes de consumo le pudiesen conferir, vale decir, que solo podría deducir demanda en los términos ya referidos, lo que no ocurriría en el caso de marras;

2.- Excepción de falta de legitimación pasiva.

Funda su excepción en que el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se invoca como fundamento de la demanda, sanciona a su representada por una infracción al DL 211, que no es una ley de consumo, por lo que dicho fallo no puede darse por constitutivo de una infracción a la LPC, lo que traería la consecuencia de que la acción incoada en autos no puede dirigirse en contra de su representada por carecer de legitimación pasiva.

Destaca que una sentencia del TDLC solo puede sancionar por ilícitos libre competencia, no infracciones a la Ley de Protección a los Consumidores, y precisamente, en el fallo aducido por Sernac no hay ninguna declaración, constatación ni menos condena por haberse infringido dicha ley o algún derecho de los consumidores por la parte que representan, cuestión que ni siquiera fue materia del juicio ante el señalado tribunal. Por ello, no podría la demandante justificar su libelo en una infracción a la LPC, tomando como sustento de su pretensión un fallo de libre competencia, pues solo ante la vulneración de un derecho de los consumidores puede un proveedor ser sujeto pasivo de una acción indemnizatoria, pero de conformidad con el artículo 50 de la LPC.



Enfatiza que aun cuando la demanda realiza una vaga mención a la letra e) del artículo 3 de la LPC, que consagra el derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor, dicha reparación ha de tener su fuente concreta en el quebranto de un deber contractual contraído por el infractor, lo que no se configura en autos, pues el Sernac se ha fundado en un fallo por infracción a la libre competencia, situación que viene a reafirmar que su representada no debió ser demandada.

3.- Inexistencia de daño indemnizable por la falta de requisitos legales y de falta de causalidad del mismo.

Señala que, desde el principio, la demanda adolece de una errónea calificación de los hechos por los cuales se estableció el ilícito anticompetitivo, tanto en la sentencia de 15 de enero de 2014, dictada por el Tribunal de la Libre Competencia, como aquella de fecha 20 de abril de 2015, de la Excm. Corte Suprema. Sostiene que los hechos reprochados en estas sentencias no han sido el alza concertada de tarifas por parte de las empresas que fueron requeridas por la FNE en su oportunidad, pues los hechos y actuaciones reprochados correspondieron a aquellos que tuvieron la aptitud para afectar la libre competencia en el mercado, en lo pertinente al transporte público de pasajeros de la ruta Santiago-Curacaví, en un periodo que va desde el año 2008 a principios de 2011. En este punto, la sanción por el ilícito anticompetitivo no ha sido por un acuerdo colusorio que se plasmara en el alza concertada de los precios de los pasajes para esta ruta en el periodo indicado, sino que por haberse acreditado la ocurrencia de hechos y actos ilícitos que tuvieron la aptitud para influir coordinadamente en una variante relevante de competencia: Los precios.

Recalca que la demanda se basa en las referidas sentencias dictadas en sede de libre competencia, incurriendo en un error, puesto que asume que el ilícito anticompetitivo consistió en un alza concertada de tarifas, lo que no obedece a la realidad, razón por la que no puede prosperar en modo alguno, desde que su fundamento central es errado, y la indemnización de



perjuicios solicitada al petitorio no establece relación de causalidad alguna entre el hecho y las consecuencias.

Arguye que las imputaciones formuladas en el requerimiento de la FNE, por el que se inició el proceso seguido ante el Tribunal de la Libre Competencia, propusieron que la guerra de precios devenida con el ingreso del competidor Atevil al mercado de transporte público de pasajeros en la ruta mencionada, habría terminado por acuerdo entre las 3 requeridas, verificado inicialmente en mayo de 2008, replicado, luego del presunto descolgamiento del cartel de Atevil, en Abril de 2009 y ratificado a inicios de los años 2010 y 2011. Sin embargo, la sentencia prescinde de cualquier análisis sobre las tarifas resultantes del presunto acuerdo, como también de los efectos que dicho arreglo materializado pudo tener en el mercado, pues del análisis de la misma, no se estableció un alza concertada de tarifas y menos la determinación de estas. Agrega, que como el hecho ilícito no existe, cae como consecuencia toda la imputación del régimen de responsabilidad que se ha querido atribuir a la demandada, sin que sea posible acceder a la demanda impetrada en su contra;

4.- Excepción de inexistencia de la prejudicialidad alegada por el Sernac. Al respecto, reiteran que el artículo 30 del DL 211 establece una obligada prejudicialidad para el tribunal que conozca de la demanda indemnizatoria subsecuente a una condena por infracción a las normas de libre competencia, pues su fallo indemnizatorio deberá fundarse precisamente en la sentencia firme dictada por el TDLC en cuanto a las conductas, hechos y calificación jurídica determinadas en esa sede.

Expresa que el procedimiento de acciones por intereses colectivos y difusos está formulado en dos etapas diferenciadas, una en que se debe declarar la infracción a la LPC; y la segunda, en que se establecen las indemnizaciones para cada afectado, sin sujetarse al mérito de una sentencia dictada en otro proceso diverso. Así, ninguna de esas etapas podría tener lugar en autos, pues la prejudicialidad que alega el Sernac para sostener su demanda sería improcedente en este caso, porque no se puede aplicar en un proceso colectivo. A continuación, identifica dos fundamentos que sustentan la excepción deducida: 1) La necesidad de que exista una declaración de la



infracción a la LPC (u otra ley de consumo) para que pueda procederse a una condena indemnizatoria en el caso de marras; 2) Señala que la prejudicialidad del artículo 30 del D.L. 211 no es aplicable a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, pues aquélla ha sido prevista exclusivamente para el pago de indemnizaciones derivadas de una infracción a las normas de la libre competencia. De esta manera, extrapolar esa prejudicialidad a normas distintas de aquella que la contempla, constituiría una grave infracción a las normas del debido proceso que ampara la Constitución Política de la Republica y consecuentemente, un atropello al principio de legalidad que rige las normas de procedimiento, atendida su naturaleza de orden público;

5.- Improcedencia de la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual deducida.

Explica que el Sernac solicita la indemnización por responsabilidad extracontractual del artículo 30 del DL 211, que es procedente solamente para quienes hayan sido partícipes del mercado relevante en el cual se produjo la infracción al artículo 3 del mismo decreto, que no son los consumidores por quienes actúa el servicio.

Estima que, dado que las acciones de consumo siempre son de carácter contractual, Sernac no podría demandar responsabilidad extracontractual en esta sede, lo que además cobra fuerza al hablar de intereses colectivos. En razón de ello, la entidad habría equivocado el fundamento jurídico de su demanda, que nunca pudo ser el estadio de la responsabilidad extracontractual, al acudir al supuesto previsto en el artículo 30 del DL 211 para interponerla;

6.- Excepción fundada en la omisión de una acumulación inicial de acciones exigida por la ley.

Manifiesta que esta excepción inhabilita o imposibilita la acción incoada, en atención a la omisión de deducir -previo a la demanda indemnizatoria de autos- la correspondiente acción infraccional. Indica que el tipo de acumulación que interesa para efectos de esta defensa es la acumulación sucesiva, debiendo señalar que el tema se trata complementariamente, desde



la perspectiva de una acumulación correcta o indebida de acciones, pero no desde la perspectiva de la no acumulación de las mismas cuando ella es necesaria, como ocurre en este caso, debido al proceder del Sernac.

Adiciona que en la especie no solo se trata de que el demandante acumulara indebidamente las acciones que debía deducir, sino que omitió la acción previa o acción-requisito de la pretensión resarcitoria, y con ello la actora habría evadido lo establecido por la ley, al ejercer únicamente la acción indemnizatoria, sin interponer la infraccional, la cual no puede prosperar, pues depende de ella;

7.- Improcedencia de las indemnizaciones de perjuicios demandadas por supuesta infracción a intereses difusos de los consumidores.

Alega la improcedencia de demandar perjuicios en el caso de los intereses difusos, pues ellos, por definición, no serían reparables indemnizatoriamente y, de hecho, cuando son resarcibles dejan de ser difusos, puesto que los intereses colectivos y difusos son de carácter indivisible y las reparaciones siempre tienen titularidad individual. Por ende, técnicamente la reparación solo se predicaría de los intereses individuales homogéneos. En ese sentido, la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores reconoce que los intereses colectivos son indemnizables, lo que permitiría decir que son intereses individuales homogéneos que, por razones prácticas, se tramitan como colectivos, pero en el caso de los intereses difusos la situación sería distinta, pues los incisos finales del artículo 50 de la LPC expresan que para determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan será necesario acreditar el daño y el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados, vínculo que en la especie, dada la definición de “Intereses Difusos” de la LPC, no existiría;

8.- Inexistencia del daño demandado. Afirman a este respecto que no habría existido daño o perjuicio alguno susceptible de ser indemnizado, que tenga como fuente o causa directa o indirecta alguno de los hechos en que el Sernac apoya su demanda, más aún considerando su errada calificación y evaluación de lo declarado en las sentencias mencionadas en el libelo pretensor. Así, no es efectivo que los hechos invocados en este hayan



generado perjuicio alguno a los consumidores que malamente pretende representar la institución, sea que estos se sitúen en la posición de haber comprado pasajes a un presunto sobreprecio, o bien, que no hayan podido adquirir estos mismos en razón de este, todo en la ruta asociada al mercado relevante. Con todo, deberá tenerse presente que la demanda pretende establecer como hechos reprochados en sede de libre competencia se vinculan con presuntas alzas de tarifa, lo que, como se demostró, es del todo inexacto.

9.- Inexistencia de daño indemnizable por falta de requisitos legales y de falta de causalidad del mismo.

Sostiene que los daños cuya reparación se pretende no satisfacen todas las exigencias copulativas que la Doctrina y la Jurisprudencia reclaman para ello, y que debieran ser acreditados por el actor, a saber que: a) El daño debe ser legítimo, no contrario a derecho; b) El daño debe ser significativo; c) El daño debe ser cierto, o sea, real, existente; y d) El daño debe ser directo, causado por el comportamiento del demandado y tiene que ser objetivamente imputable a tal hecho. De estos requisitos, habría algunos que el demandante no estaría en condiciones de acreditar en el proceso, lo que conduce indefectiblemente al rechazo de la demanda;

10.- Indeterminación de la contribución al daño en el evento de su existencia. Sustentan esta alegación en dos aspectos centrales: (i) Dado que no se ha demandado a todos los participantes del ilícito anticompetitivo invocado en la demanda, no es jurídica, física ni económicamente posible determinar de qué manera pueden los demandados contribuir al daño; (ii) Que al omitir a uno de los actores de dicho ilícito, el Servicio Nacional del Consumidor solicita se indemnizen los daños provocados a los intereses colectivos y difusos de los consumidores, sin señalamiento de la contribución de cada codemandada a dichas indemnizaciones, en el evento improbable que el tribunal diera lugar a la pretensión, lo que hace imposible condenar a su representada;

11.- Excepción de prescripción.



Funda la excepción en que el Sernac, al hacer uso de la acción concedida por el artículo 30 del DL 211, pero sujetándose a las normas de procedimiento de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, no podría eludir el plazo que esa norma dispone para la prescripción de la acción.

Así, la acción contravencional del artículo 26 de la LPC, prescribe en 6 meses contados desde que haya incurrido la infracción respectiva, por lo que, para dicho cómputo habrá que considerar que los actos que representaron la aptitud para afectar la libre competencia ocurrieron entre 2008 y 2011, por lo que, en tal escenario, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción de la acción deducida. Por otra parte, si este se contara antojadizamente desde el cúmplase dictado por el TDLC, igualmente la acción se encuentra prescrita, pues entre el 30 de abril de 2015 y la fecha de notificación de la demanda se ha configurado el mismo plazo.

Asimismo, recalca la improcedente del término de prescripción de la acción del artículo 30 del DL 211, pues el Sernac ha invocado impropriamente el estatuto de la responsabilidad extracontractual de dicha norma, pero sometida a conveniencia al procedimiento establecido en la LPC, por lo que no resulta pertinente al caso aplicar el criterio de los 4 años que establece el artículo 20 del decreto, contados desde que se encuentre ejecutoriada la sentencia definitiva, por encontrarse la demanda sujeta al procedimiento especial regulado en la Ley 19.496.

Por lo expuesto precedentemente, viene en oponer la excepción de prescripción de la acción ejercida por el Sernac por haber transcurrido en exceso el plazo de 6 meses regulado por la LPC, contados desde la infracción respectiva; y subsidiariamente, la prescripción de toda acción ejercida por el Sernac por haber transcurrido más de 4 años desde la eventual infracción a las normas de consumo contenidas en la misma ley;

UNDÉCIMO: Que a fojas 225, con fecha 26 de enero de 2016, comparece José Tomas Fabres Bordeau, abogado, en representación de Alejandro Antonio Cabello Reyes, quien viene en contestar la demanda,



solicitando su rechazo, con expresa condena en costas, por los argumentos que a continuación se exponen.

1.-Improcedencia de la acción colectiva. Señala que el Sernac, dedujo demanda colectiva de indemnización de perjuicios, la cual se sustenta en la condena que impuso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a través de la sentencia N° 133/ 2014, dictada en los autos Rol C-224-2011, al cual se acumuló el proceso Rol 232-2011 del mismo TDLC, confirmada por la Excma. Corte Suprema en el recurso Ingreso N° 6429-2014, por infracción del artículo 3 letra a) del Decreto Ley 211, y no a otras normas legales, por las cuales su representado no ha sido juzgado ni sancionado, único acto ilícito por el cual quienes han sufrido daños pueden reclamar la indemnización correspondiente. Por el contrario, si se quisiera reclamar una pretensión indemnizatoria a consecuencia de infracciones a la LPC, el servicio debió haber interpuesto la correspondiente acción infraccional a través de cualquiera de los procedimientos contemplados en la norma.

Ahora bien, la acción ejercida en autos corresponde a la de indemnización de perjuicios del artículo 30 del DL 211, pretendiendo someterla al procedimiento colectivo regulado en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Sin embargo, la norma recién citada hace aplicable a la acción indemnizatoria perjuicios a que haya lugar con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia definitiva ejecutoriada, el procedimiento sumario del Título XI del Libro III, que sería el adecuado para este caso y no el regulado en la LPC, lo que materializaría la inadecuación del procedimiento intentado en autos por el Sernac.

2.- Inaplicabilidad del régimen de responsabilidad extracontractual. Sostiene que el Sernac en su demanda acciona en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores y en distintos pasajes de la misma, señala que exige la indemnización de los perjuicios extracontractuales, ignorando la relación de consumo entre don Alejandro Cabello Reyes y sus pasajeros o usuarios -a quienes se dañó- está constituida por un contrato de transporte, definido por el artículo 2013 del Código Civil, y regulado por los artículos 2014 y siguientes del mismo texto legal, estableciendo derechos y



obligaciones de las partes, mientras que el Código de Comercio lo regula entre sus artículos 166 y 232.

Explica que la relación de consumo existente entre su representado y los usuarios cuyos intereses representa Sernac es de naturaleza contractual, por lo que correspondía invocar dicho estatuto, cosa que no fue hecha por el demandante, por lo que no podría exigírsele la responsabilidad extracontractual como proveedor transportista.

Cabe señalar que la acción reparatoria por responsabilidad extracontractual está excluida de las acciones colectivas, conforme el tenor del artículo 50 de la LPC, por cuanto esta exige la existencia de un vínculo contractual. Asimismo, en cuanto al daño difuso, rigen las mismas reglas respecto de las personas que contrataron los servicios de transporte de don Alejandro Cabello Reyes, lo que queda confirmado por la letra e) del artículo 3 de la LPC, que otorga el derecho a la reparación e indemnización de daños materiales o morales en caso de incumplimiento de obligaciones contraídas por el proveedor, clara alusión a que esas obligaciones han sido contraídas con su consentimiento, en virtud de una convención. En este sentido, la demandante deberá probar que hay casos de personas que no pudieron transportarse entre Santiago-Curacavi-Santiago y que sufrieron daño sin contratar, dentro de las cuales, cabe analizar la responsabilidad extracontractual;

3.-Prescripción extintiva de la acción indemnizatoria extracontractual.

En este acápite, alega la prescripción de la acción en virtud del artículo 2332 del Código Civil, por haber transcurrido más de 4 años entre el ilícito colusorio establecido en la sentencia invocada, del cual su representado participó hasta enero de 2011, y la notificación de la demanda colectiva en noviembre de 2015.

Añade que, si bien es cierto que para demandar daños en virtud de condena por ilícito anticompetitivo, es necesario sentencia firme condenatoria dictada por el tribunal competente, esto es TDLC y la CS, la acción infraccional no suspende ni interrumpe la prescripción de la acción



privada de daños por responsabilidad extracontractual. Por tanto, prescrita la acción indemnizatoria, deberá rechazarse la demanda;

4.- Sobre los partícipes del ilícito sancionado por el TDLC, los eventuales daños pudieron ocasionar con su actuar, y los obligados a repararlos en caso que existiera.

Arguye que la sentencia invocada en autos acogió el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica y la demanda de particulares, condenando por infracción al artículo 3 letra a) del DL 211, por colusión a 5 personas: Pullman Bus, Alejandro Cabello Reyes, Atevil, Pedro Farías Soto y Paul Justin Fritz Gerhard Von Breitenbach Eyfriedt.

Agrega que, a pesar de la condena múltiple, Sernac decidió arbitrariamente demandar solo a dos agentes del mercado, debiendo asumir el total del costo de la reparación, en tanto que un tercer agente quedó excluido de la acción de responsabilidad civil. En definitiva, si los demandados de autos son condenados a pagar daños, tendrán sobrecostos que no soportará su competidor Atevil, generando una ventaja anticompetitiva en su favor ocasionada por el actuar discriminatorio de Sernac, lo que no liberaría a esta última de la responsabilidad civil que le atribuye el artículo 30 del DL 211.

En este contexto, todo autor de daño debe responder por él, y puesto que también fueron condenados los señores Pedro Farías Soto y Paul Justin Fritz Gerhard Von Breitenbach Eyfriedt, para el caso de dictarse condenatoria en esta sede civil, esta magistratura deberá descontar del daño que pudiera acreditarse, la porción que cabe asumir a los tres condenados por el TDLC y la CS, que fueron no traídos a juicio por el Sernac, exigiendo la aplicación de una regla de proporcionalidad.

En concreto, para analizar las situaciones planteadas por la actora, se debe analizar el fallo completo del TDLC, que fue confirmado por la CS, y ello no fue realizado por el Sernac en su libelo, lo que le hizo incurrir en serios errores, en cuanto a la naturaleza del daño que pudiera haberse producido, como también en determinar quienes lo han podido sufrir (víctimas) y quienes deben repararlo, todo bajo la regla que cada cual debe reparar los



daños que causó, pero ninguno está obligado a reparar los daños que otro causó.

Menciona diversos considerandos resolutivos de la sentencia del TDLC, en orden a señalar -entre otros hechos relevantes- que con anterioridad a la entrada de Atevil al mercado de transporte de pasajeros en la ruta Santiago-Curacaví-Santiago (mes de diciembre de 2007) haya existido un acuerdo anticompetitivo entre Pullman Bus y Alejandro Cabello Reyes, como también en que se tuvo por acreditado que Atevil ingresó al mercado con una tarifa de promocional. Además, que por primera vez a fines de 2008, las tres empresas acordaron subir paulatinamente el precio, poniendo término a la guerra de precios, lo que se mantuvo hasta fines de mayo de 2009, época en que se acordó una nueva tarifa. Así, a partir de enero de 2010, Atevil y Pullman Bus acordaron subir la tarifa, lo que fue aceptado por Ruta Curacaví, que también la subió, manteniendo los precios hasta el mes de diciembre de 2010. Luego, en enero de 2011, Atevil y Pullman Bus acordaron una nueva alza de precios, la cual no fue aplicada por Alejandro Cabello Reyes. Finalmente, en abril de 2011, la empresa Atevil decidió poner término a su participación, denunciando los hechos ante la Fiscalía Nacional Económica, acogiéndose al beneficio de la delación compensada.

Estima que, señalados los hechos establecidos en la sentencia, cabe hacerse cargo de los dos tipos de daños señalados en la demanda. En primer caso, los consumidores que utilizaron el transporte público a un precio colusorio, más alto que el hubiere existido en un mercado competitivo, del cual Ruta Curacaví no participó ni aplicó el alza de precios en el mes de enero de 2011, lo que quedó asentado en la sentencia del TDLC, debiendo descartarse todo daño por la tarifa colusiva que nunca aplicó. En el segundo caso, los consumidores que se vieron impedidos de acceder a dicho transporte público a causa del alza artificial de sus precios, lo que devela un desconocimiento por parte de Sernac de la teoría económica y de las distintas alternativas de transporte de pasajeros en la misma ruta, no existiendo usuario alguno que haya dejado de transportarse, lo que justificaría declarar temeraria la acción de autos.



Por las razones expuestas precedentemente, solicita el rechazo de la demanda interpuesta, con expresa condena en costas;

DUODÉCIMO: Que la demanda fue declarada admisible a fojas 45, y con el mérito del proceso, por resolución de fojas 309, el tribunal **recibió la causa a prueba**, providencia que fue modificada con fecha 8 de febrero de 2017, fijando los puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos en los siguientes términos: 1.- Efectividad que el Tribunal de la Libre Competencia dictó sentencia que acogió el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica en los autos Rol N° 224-2011, seguidos ante dicho Tribunal y en la afirmativa de haber sido confirmado por la Excma. Corte Suprema, conductas, hechos y calificación jurídica de los hechos establecidos en dichas sentencias, efectividad de que estas se encuentran a firmes; 2.- En la afirmativa del punto anterior, efectividad de que los demandados causaron perjuicios a los consumidores con ocasión de las conductas y hechos efectuados por los demandados, calificación jurídica de los mismos y si estos se encuentran establecidos en las sentencias señaladas; 3.- En la afirmativa de los puntos anteriores, y si por las conductas llevadas a cabo por los demandados, los consumidores sufrieron o existieron perjuicios, naturaleza y monto de los mismos;

DÉCIMO TERCERO: Que, a fin de acreditar sus alegaciones, la parte demandante rindió **prueba documental**, consistente en:

- 1.- Copia de sentencia dictada por la Corte Suprema en autos Rol N° 6249-2014, de fecha 20 de abril de 2015, en custodia N° 6582-2015.
- 2.- Copia de la sentencia N° 133/2014 dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con fecha fecha 15 de enero de 2014, en los autos Rol 224-2011 de dicho tribunal, en custodia N° 6582-2015.
- 3.- A fojas 36, copia del oficio N° 8-2012, que contiene “Informe Proyecto de Ley 50-2011” suscrito por el pleno de la Excma. Corte Suprema, con fecha 17 de enero de 2012.
- 4.- A fojas 119, informe en derecho elaborado por el Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, titulado “Legitimidad del Sernac para demandar la Indemnización de los daños causados por un cartel a los



consumidores” de fecha 31 de agosto de 2012, suscrito por los abogados Nicolás Rojas Covarrubias y Francisco Agüero Vargas;

5.- A fojas 367: (i) Copia de requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, que dio origen a los autos contenciosos Rol N° 224-2011, seguidos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; (ii) Copia de informe económico titulado “Renta como proxy de daño económico y aplicación de multa óptima”, elaborado por los economistas señor Fabián Basso Vergara y señor Francisco Caravia Rabi; (iii) Informe económico denominado “Informe de daños a consumidores en colusión de buses ruta Santiago-Curacaví”, elaborado por el economista señor Alonso Vega Vidal, en el mes de febrero de 2017; (iv) Copia de informe en Derecho, titulado “Reparación de los daños colectivos y difusos en el juicio “Servicio Nacional del Consumidor con Farmacias Cruz Verde S.A. y otros”, Rol C-1940-2013 seguido ante el 10° Juzgado Civil de Santiago”, elaborado por el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Abogado Mauricio Tapia, de fecha 28 de abril de 2015;

6.- A fojas 504, Oficio emitido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con fecha fecha 22 de junio de 2018, a través del cual se remiten piezas pertinentes del expediente de libre competencia, solicitadas por esta magistratura con fecha 9 de mayo de 2018, según consta a fojas 503 del Tomo I;

DÉCIMO CUARTO: Que, a su turno, la demandada Pullman Bus Costa Central S.A, acompañó la siguiente **prueba documental**:

1.- A fojas 371, informe económico denominado “Naturaleza y Cuantificación de Eventuales Perjuicios Económicos Ocasionadas a los Consumidores Usuarios del Servicio de Transporte Público de la Ruta Santiago-Curacaví Durante el período 2008-2011”, elaborado por el economista Sr. Juan Ambrus Held;

2.- A fojas 374, en presentación incorporada a la carpeta electrónica con fecha 03 de marzo de 2017, copia de demandas colectivas presentadas por el Sernac en causas Rol C-47718-11 del 6° Juzgado Civil de Santiago “Banco Ripley; Rol C-10051-2014 del 12° Juzgado Civil de Santiago



“Banco de Chile”; Rol C-1391-2012 del 14° Juzgado Civil de Santiago
“Banco Santander”; Rol C-25010-2014 del 10° Juzgado Civil de Santiago
“Matik Kard S.A.”; y Rol C-1746-2012 del 22° Juzgado Civil de Santiago
“Créditos Organización y Finanzas”;

DÉCIMO QUINTO: Que con fecha 7 de abril de 2017, la demandada Pullman Bus rindió **prueba testimonial**, incorporada a fojas 458 y siguientes, compareciendo a estrados **Juan Botond Ambrus Held**, quien señala haber confeccionado un estudio respecto de los aspectos económicos materia de este juicio, así como de haber participado en un informe en sede de Libre Competencia, junto con la empresa Grand Thornton, encargado por la empresa Pullman Bus Central para dicha causa. Asimismo, reconoce su autoría y firma del documento denominado “Naturaleza y Cuantificación de Eventuales Perjuicios Económicos Ocasionadas a los Consumidores Usuarios del Servicio de Transporte Público de la Ruta Santiago-Curacaví Durante el período 2008-2011” acompañado al expediente con fecha 3 de marzo de 2017;

DÉCIMO SEXTO: Que, por su parte, el demandado Alejandro Antonio Cabello Reyes, con el fin de acreditar los hechos, excepciones y defensas que alegó, rindió, en lo pertinente para la presente litis, la siguiente **prueba documental**:

1.- A fojas 378, copia de Informe denominado “Ruta Curacaví: Cálculo de tarifa de competencia, elaborado por Juan Esteban Doña Novoa, en Marzo 2017;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, con fecha 6 de abril de 2017, el demandado Sr. Cabello Reyes rindió **prueba testimonial**, incorporada desde fojas 444 a 457, declarando los testigos Juan Esteban Doña Novoa, Oscar Segundo Castillo Ossandón, Alex Harry Castillo Olivera y Eduardo Antonio Madrid Campos.

A fojas 444, comparece **Juan Esteban Doña Novoa**, quien reconoce su autoría y firma puesta en el documento mencionado al considerando precedente, el cual fue elaborado para determinar si los consumidores sufrieron perjuicios y su eventual monto. Refiere que el perjuicio que pudo ocasionarse corresponde a la diferencia entre lo que hubiera sido una tarifa de competencia y aquella que en definitiva acordaron las empresas



coludidas, tomando como referencia para la confección de su informe la tarifa referencial de competencia para el tipo de buses que utilizaba Ruta Curacaví y Pullman, antes de la entrada al mercado de Atevil. Concluye que, comparando un precio preferencial de competencia reajustado por cualquiera de las fórmulas con tarifas fijadas por colusión, a lo largo del período aludido, los usuarios no habrían sido perjudicados, principalmente, por las bajas tarifas que existían durante el primer período a contar de la entrada de la empresa Atevil.

A fojas 450, comparece a estrados **Oscar Segundo Castillo Ossandón**, quien declara que conoce los hechos del juicio, por haber demandado a las empresas Pullman Bus, Ruta Curacaví y Atevil. Agrega que el dictamen de la sentencia no le fue favorable, porque le subieron el precio del pasaje por parte de Atevil, cuyo servicio no era tan bueno, señalando que las otras dos empresas tenían una tarifa justa para el servicio que entregaban, siendo estas confortables por la calidad de los buses, mantenían ayudante y maletero, lo que facilitaba el acceso aquellos que portaban equipaje, cosa que no ocurría con Atevil, que cobraba menos y que luego alzó su tarifa a nivel de Pullman.

A fojas 452, declara **Alex Harry Castillo Olivera**, quien conoce los hechos del juicio por haber demandado a las empresas coludidas por los cobros de pasaje, que resultaban excesivos para el servicio que prestaban, pues no se condicionaba con el precio del pasaje. Añade a que no tiene claro el resultado de la sentencia, y que Atevil llegó al mercado con un precio más bajo, pero con un tipo de maquinaria de menor calidad, sin aire acondicionado, ni auxiliares en los buses, por lo que el alza en sus precios perjudicó a todos los usuarios, por una mala calidad en el servicio y mala calidad de las máquinas utilizadas. Indica que toma la primera locomoción que se realice con la ruta a Santiago, sin importar el valor, dada la secuencia de salida de buses.

A fojas 455, comparece **Eduardo Antonio Madrid Campos**, quien declara haber sido prestador de servicios con buses para la Empresa Ruta Curacaví desde 1994 a 2012, y conocer el tema porque trabajó con buses del sector, señalando que entre el año 2007 o 2008, entró Atevil a competir, con liebres o taxi, buses de menor calidad, ofreciendo los pasajes a un



precio más bajo, comenzando la pelea de tarifas, y que, al verse perjudicada dicha empresa, tuvo que subir sus precios también. Indica que originalmente ellos ofrecieron menor valor para captar el público, pero a los meses subieron sus tarifas paulatinamente. Además, agrega que Pullman Bus y Ruta Curacaví, prestaban servicios con suspensión de aire, con aire acondicionado, motores grandes con gran capacidad y con ayudantes, a diferencia de Atevil, que lo hacía con taxibuses básicos, asientos de tevinil fijos, incómodos, sin aire y sin control de velocidad. Menciona que los costos en esos años eran muy elevados, el petróleo era caro, la renovación de máquinas también, y la tarifa de Atevil, era insuficiente;

DÉCIMO OCTAVO: Que igualmente la parte demandada (Cabello Reyes) solicitó al tribunal **prueba confesional** del representante legal de la demandante Servicio Nacional del Consumidor, don Ernesto Muñoz Lamartine, quien compareció con fecha 7 de septiembre de 2017 a absolver posiciones al tenor del pliego acompañado a fojas 491 y siguientes.

El absolvente señala que es efectivo que por sentencia N° 133/2014 dictada por el TDLC en autos Rol C-224-2011, confirmada por la Corte Suprema, por infracción al artículo 3 letra a) del DL 211, las empresas Pullman Bus Costa Central S.A, Atevil Mecánica Diésel S.A y el demandado Alejandro Cabello Reyes, se coludieron para repartir las frecuencias y alzas de tarifas, en el servicio de transporte ruta Santiago-Curacaví-Santiago, con la intervención de los señores Paul Justin Fritz Von Breitenbach Eyfriendt y Pedro Farías Soto, acogiendo la demanda interpuesta por los señores Alex Castillo Olivera y Oscar Segundo Castillo Ossandón.

Asimismo, manifiesta que el Sernac estando legitimado para iniciar demandas colectivas en defensa de interés colectivo o difuso de los consumidores, no está obligado a ejercer dichas acciones, por lo que se realiza a través de un procedimiento interno, reglado y con el concurso de un comité de soluciones colectivas, un análisis pormenorizado y basado en criterios uniformes de los hechos y circunstancias en las que el Servicio puede o no iniciar procedimientos prejudiciales -denominados mediaciones colectivas- con el fin de obtener reparación oportuna, compleja, proporcional y universal de los perjuicios causados a los consumidores por



hechos eventualmente constituidos de infracción de ley sobre protección de los derechos de los consumidores o infracciones a normativas especiales relacionadas con dichos derechos, como también de los antecedentes que son considerados para iniciar este clase de acciones.

DÉCIMO NOVENO: Que el artículo 30 de DL 211 -hoy modificado por la Ley 20.945- establecía que “La acción de indemnización de perjuicios a que haya lugar con motivo de la dictación por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de una sentencia definitiva ejecutoriada, se interpondrá ante el tribunal civil competente de conformidad a las reglas generales, y se tramitará de acuerdo al procedimiento sumario establecido en Libro III del Título XI del Código de Procedimiento Civil. El tribunal competente, al resolver la indemnización de perjuicios, fundará en su fallo en las conductas, hechos y calificación jurídica de los mismos, establecidos en la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dictada con motivo de la aplicación de la presente ley”.

Bajo el amparo de dicha norma, el Sernac deduce demanda colectiva indemnizatoria en beneficio de los consumidores afectados, por cuanto las empresas individualizadas se coludieron para fijar las tarifas cobradas a los consumidores y coordinar el reparto de las frecuencias en la ruta Santiago-Curacaví-Santiago, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una conducta anticompetitiva, invocando la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dictada con fecha 15 de abril de 2014, confirmada por la Excma. Corte Suprema por resolución de 20 de abril de 2015;

VIGÉSIMO: Que, como se mencionó latamente en la parte expositiva de este fallo, el Servicio Nacional del Consumidor accionó invocando una vulneración del interés colectivo y difuso de los consumidores, en virtud de los artículos 51 y siguientes de la Ley 19.496.

Que el citado artículo 51 dispone que “En este procedimiento especial la prueba se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica”, esto es, de acuerdo a las normas de la lógica, el buen sentido, a las máximas de la experiencia, las que son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano y experiencia del juez, quien en su labor de apreciación y



ponderación debe analizar la prueba con arreglo a un conocimiento experimental de las cosas. De tal forma, la sana crítica es, además, de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia que todo hombre se sirve en la vida;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que en este sentido, admitida la admisibilidad de la demanda, el Servicio Nacional del Consumidor solicita se acoja la demanda, y en definitiva, determinar los grupos y subgrupos de consumidores que fueron afectados por las demandadas, y declarar la procedencia y monto de las correspondientes indemnizaciones o reparaciones a favor del grupo o de cada uno de los subgrupos que correspondan, conforme a los artículos 51 N° 2, 53-A y 53-C letra c) del mismo cuerpo legal, con expresa condenación en costas;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, primeramente, y pese a que se trata de una petición interpuesta de manera subsidiaria, corresponde hacerse cargo de la excepción de prescripción de la acción entablada opuesta por ambas demandadas, atendido su carácter perentorio.

Sobre el particular, el artículo 26 de la ley N 19.496 establecía un plazo de 6 meses computados desde que se haya incurrido en la infracción respectiva, que tras la modificación legal pertinente se amplió a 2 años, contados desde que haya cesado en la infracción respectiva.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, a juicio de esta sentenciadora, el cómputo del plazo de prescripción de 2 años aplicable en la especie debe considerar la disponibilidad del ejercicio de la acción para el acreedor, puesto que de otra forma se haría ilusorio el derecho tutelado que subyace a la misma.

En ese orden de ideas, del examen de los documentos acompañados, en especial a la sentencia de la Excma. Corte Suprema que confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es posible advertir que entre la fecha del cúmplase de dicho fallo -30 de abril de 2015- y la notificación de la demanda -29 de octubre y 18 de noviembre de 2015 respectivamente- no transcurre el plazo indicado, lo que debe conducir a desestimar la excepción opuesta;



VIGÉSIMO CUARTO: Que luego de haber opuesto excepciones dilatorias, y como parte integrante de su escrito de contestación, la demandada Pullman Bus Costa Central S.A dedujo excepciones de falta de legitimación activa y pasiva.

La primera -en síntesis- la funda en el hecho de que la acción intentada en autos por el actor comprendería derechos subjetivos individuales y no derechos supraindividuales, como son los que representan los intereses colectivos y difusos que legítimamente pueda representar el organismo público, los cuales al no existir, lo que hace imposible conceder la pretensión demandada, junto con una serie de argumentos que reforzarían la idea de que el servicio carece de legitimación para ejercer la acción colectiva.

La segunda apunta a que el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se invoca como fundamento de la demanda, sanciona a su representada por una infracción al DL 211, que no es una ley de consumo, por lo que dicho fallo no puede darse por constitutivo de una infracción a la LPC, lo que traería la consecuencia de que la acción no puede dirigirse en contra de su representada por carecer de legitimación pasiva. Además, de que el TDLC solo puede sancionar por ilícitos libre competencia, no infracciones a la Ley de Protección a los Consumidores, como también expresa que el derecho a la reparación e indemnización consagrado en la letra e) del artículo 3 de la LPC, dicha reparación ha de tener su fuente concreta en el quebranto de un deber contractual, lo que no se configura en autos, pues la actora ha citado un fallo por infracción a la libre competencia;

VIGÉSIMO QUINTO: Que se debe tener presente que tanto la jurisprudencia como la doctrina han establecido que la legitimación es un presupuesto procesal que dice relación con la aptitud para ser parte en un juicio, siendo determinada por la pretensión planteada en el pleito, de los cuales el propio magistrado puede relevar de oficio, aunque la parte no lo haya señalado.



Se ha entendido que la legitimación activa es el reconocimiento que el ordenamiento efectúa a una persona otorgando la posibilidad de accionar eficazmente atendida la relación existente entre el sujeto y el objeto de un proceso determinado. A la inversa la legitimación pasiva es aquella que permite accionar eficazmente en contra del sujeto, atendida la existencia de la relación antes referida.

“La legitimación procesal o legitimatio ad causam, entonces, es la consideración legal, respecto de un proceso particular, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto de litigio y en virtud del cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que dichas personas figuren como tales en el proceso” (Cristián Maturana Miquel, Disposiciones comunes a todo procedimiento, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento Derecho Procesal).

En ese orden de ideas, correspondiendo al actor la prueba de las condiciones de su acción, a él incumbe demostrar su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado. La falta de calidad, sea porque no existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede, determina la procedencia de la defensa por falta de legitimidad.

Por consiguiente, la legitimación de la calidad de obrar no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia, por lo que, si de la prueba no resulta la legitimación activa o pasiva, la sentencia rechazará la demanda, no porque ésta haya sido mal deducida, sino porque la acción no corresponde al actor o contra el demandado;

VIGÉSIMO SEXTO: Que el Servicio Nacional del consumidor alega que, en las sentencias dictadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Excma. Corte Suprema, se establecieron hechos que fueron calificados jurídicamente, que habrían causado perjuicios a los consumidores, estimando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Ley 211 no debería volver a discutirse tales hechos, ni su



calificación, sino tan solo los perjuicios y su nexos con dichas conductas, conforme a las normas de la responsabilidad civil extracontractual.

Cabe recordar que el artículo 58 de la misma ley establece que: “Corresponderán especialmente al Servicio Nacional del Consumidor las siguientes funciones: g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores y hacerse parte en aquellas causas que comprometan los intereses generales de los consumidores”.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, no obstante, se constata que la demandante respalda el libelo en un supuesto perjuicio difuso. De hecho, afirma que una enorme cantidad de consumidores se vieron afectados por las conductas colusorias de las empresas demandadas. Sin embargo, el inciso final del artículo 50 de la LPC establece que: “Para los efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que procedan, de conformidad a las normas señaladas en el párrafo segundo de este Título, será necesario acreditar el daño y el vínculo contractual que liga al infractor y a los consumidores afectados”. Por ende, los intereses difusos no dan derecho para demandar las reparaciones que procedan, por faltar el vínculo contractual indispensable que debe existir entre proveedor y consumidores, supuesto que, de cualquier manera, no pudo verificarse en el caso planteado. En suma, no verificándose el interés colectivo difuso invocado para acreditar la legitimación de la entidad demandante, conforme a la extensa cantidad de normas citadas, y en virtud de los términos precisos de la ley 19.496, no queda más que acoger la excepción deducida, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta;

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, habiéndose acogido la excepción de falta de legitimación activa, se omitirá pronunciamiento respecto del resto de las alegaciones deducidas por la defensa de las demandadas;

VIGÉSIMO NOVENO: Que la demás prueba rendida en nada altera lo previamente concluido;

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1545, 1546 y 1698 del Código Civil, 144, 160, 170, 254, 680 y siguientes



del Código de Procedimiento Civil; y disposiciones pertinentes de la Ley 19.496, **se resuelve que:**

I.- Se rechaza la tachada deducida por la parte demandante en contra del testigo Juan Esteban Doña Novoa, presentado por la parte demandada Alejandro Cabello Reyes;

II.- Se acoge la excepción de falta de legitimación activa deducida por la demandada, y en consecuencia, se rechaza la demanda colectiva interpuesta con fecha 15 de septiembre de 2015;

III.- Cada parte pagará sus costas.

Rol C-22416-2015.-

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Pronunciada por doña Nancy Torrealba Pérez, Juez Subrogante del Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago.

Autoriza Ana María Parada Arroyo, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, treinta de Octubre de dos mil veinte.**

